

Cuadernos del Sur

Número 9 ■ Mayo de 1989

Tierra  fuego
del

MEXICO, FIN DE REGIMEN, FIN DE EPOCA

Adolfo Gilly

1.

México vive una crisis profunda de la conciencia nacional. Emerge desde lo más hondo de las crisis económica, política e institucional, acumuladas y entrelazadas. Estamos todavía en los comienzos—exasperados, tumultuosos, ingenuos, inexpertos— de un movimiento político de masas que sube desde las capas más oprimidas y desprotegidas de la sociedad y arrastra e incorpora, transformándose en el camino, a grandes sectores urbanos e intelectuales, en un verdadero vuelco moral e ideológico de las conciencias y las expectativas.

Es un movimiento que mezcla inseparablemente el desamparo, la desesperación y la esperanza con una inteligencia alerta, todavía desorganizada, y con una decisión de lucha nueva para sus mismos portadores y protagonistas. Las fuerzas de la conservación social y del orden establecido, encarnadas en el régimen y en su partido el PRI, se encuentran ante un desafío desconocido para ellos. Por eso son incapaces de reconocer y de valorar en su real magnitud al enemigo que desde el fondo de México los rechaza, los ataca y amenaza sus posiciones y sus privilegios: la mayoría absoluta del pueblo mexicano.

Estamos ante un país que se ha puesto en movimiento. Sigue y seguirá moviéndose. Es falso que se trate de una mera protesta contra la política económica de austeridad del último gobierno y que, en consecuencia, ese movimiento podría ser contenido y reabsorbido por determinadas concesiones económicas. *El punto de no retorno en las conciencias ya ha sido superado.* Cualquier concesión económica, aun las que el propio movimiento pueda eventualmente arrancar, será vista como un fruto de esta movilización y por lo tanto fortalecerá sus razones y sus convicciones.

Antes, tal vez, el régimen gobernante habría podido postergar o atenuar este proceso, pero a costa de ceder en su programa histórico para este período: la reestructuración del capitalismo mexicano y de sus compromisos sociales y su reinserción en la nueva división internacional del trabajo (meta esencial del gobierno De la Madrid - Salinas de Gortari). Esta opción era inaceptable y, a mediano plazo, mucho más costosa para el propio sistema capitalista que no puede eludir su reestructuración y su readecuación a los cambios mundiales. De ahí la indiscutible racionalidad de los planes económicos del régimen en este último sexenio.

Esta racionalidad, impuesta por el mercado mundial y por sus propios intereses nacionales (como sucedió bajo formas diferentes a partir de la mitad de los años 70 en Brasil, Chile, Argentina, Corea del Sur, Taiwan y otros países de similar nivel de desarrollo industrial), implicaba a su vez, cuando menos, una triple fractura dentro del mismo régimen: con el ala nacionalista y antiimperialista proveniente de la revolución mexicana y del cardenismo, para la cual esa racionalidad era inaceptable porque, ya debilitada, la condenaba a disolverse y desaparecer; con la burocracia sindical charra, agente del Estado en el movimiento obrero y *parte integrante del aparato estatal*, para la cual dicha racionalidad implica en parte una propia y costosa reestructuración y en parte una eliminación de sus extremos más arcaicos y corrompidos; y, en el fondo y sobre todo, con los trabajadores asalariados y las masas rurales y urbanas del país, con su consenso así fuera pasivo al régimen gobernante, con sus ilusiones en su eventual reforma desde adentro alimentadas todavía por la memoria histórica del período cardenista y por las concesiones parciales posteriores, posibles hasta fines de los años 70 gracias al crecimiento pausado pero constante del producto interno bruto y de la curva salarial y al breve pero intenso auge petrolero que postergó la brusca y vertical caída de los años 80.

Esta triple fractura es *irreversible*, mucho más cuanto que el gobierno entrante no puede ni quiere detener el proceso de reestructuración capitalista y de reinserción exportadora en el mercado mundial (*que en lo esencial ya pasó también el punto de no retorno*), sino que tratará de encontrar en los importantes aunque minoritarios sectores sociales beneficiarios de esa misma reestructuración una nueva base política y social para su dominación, una **recomposición social de los sustentos del régimen político** a través del cual esa dominación se expresa. Significa entonces una fractura en las anteriores bases sociales de apoyo del régimen político, en buena parte relegadas y marginalizadas por la reestructuración capitalista, sin que dicho régimen haya

podido todavía generar otras nuevas suficientemente amplias —en otras palabras, recomponerse— como para asegurarse una nueva estabilidad.

Es la apertura de un período de *inestabilidad política estructural*, en el cual el régimen se verá permanentemente tentado a recurrir a la violencia estatal (y paraestatal) para tratar de atravesar con éxito ese período de fragilidad intrínseca propio de este tipo de recomposición y de transición.

La triple fractura implica una ruptura con el régimen y otra ruptura *dentro* del régimen, es decir, una ruptura que se convierte en *externa* y otra que continúa siendo interna.

La *ruptura interna* es la de los charros sindicales. El enfrentamiento de la burocracia sindical corporativa con la política reestructuradora ha ido creciendo. Muchos, en particular en la izquierda socialista, pensaron y esperaron durante años que la ruptura del sistema político y del PRI comenzaría por la burocracia sindical. Dicha idea era resultado de una visión falsa y doctrinariamente “clasista” y de una incomprensión de fondo sobre el carácter del Estado y del régimen político —dos cosas ligadas pero diferentes entre sí— surgidos de la revolución mexicana y de las reformas de los años 30. Los burocratas sindicales corporativos pueden resistir desde adentro determinada política del régimen, pero no pueden romper con éste y proponerse su destrucción porque son parte de él y de su partido estatal. Pueden hacer una “fronda”, nunca una revolución. Por ello, no importa cuán “radicales”, “nacionalistas” y “democráticas” sean las propuestas de algunos voceros “modernos” de esa burocracia, todas ellas se detienen cuando se llega a lo esencial: la independencia de los sindicatos con respecto al Estado, su ruptura con el PRI como partido estatal.

A su vez, por las mismas razones, el régimen político del Estado mexicano puede proponerse una nueva relación con la burocracia sindical y una reestructuración “modernizadora” de esa burocracia, pero no puede buscar su destrucción a través de un funcionamiento democrático de los sindicatos ni aceptar la ruptura de éstos con los lazos de subordinación corporativa que los mantienen dentro del PRI como partido de Estado.

En efecto, en cuanto empezó a ascender la estrella del nuevo cardenismo hacia el último trimestre de 1987, los roces y enfrentamientos entre los “modernizadores” del PRI (los salinistas) y la burocracia de la CTM y del Congreso del Trabajo no desaparecieron, pero pasaron a segundo plano frente al nuevo enemigo que amenazaba al régimen en su conjunto. Colocada entre la amenaza modernizadora del salinismo y la amenaza democratizadora del cardenismo de Cuauhtémoc, la burocracia charra no dudó: cerró filas dentro

del régimen con los “modernizadores” contra el movimiento democratizador. Del mismo modo, colocados entre la resistencia arcaica de los burócratas sindicales a sus planes “modernizadores” y el desafío moderno y democratizador desde abajo del movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, los salinistas tampoco dudaron: se aliaron dentro del régimen con los charros contra el desafío democrático de la sociedad.

La disputa entre el salinismo y los charros sindicales es una clásica disputa entre dos fracciones del aparato estatal de un mismo sistema de dominación. Sería suicida para las fuerzas democráticas tomar partido por una u otra.

La fractura dentro del aparato estatal no desapareció, como los hechos lo siguen mostrando día con día, pero sus dos partes subordinaron esa disputa a la lucha unificada *contra la ruptura democrática externa* en la cual identifican al enemigo común que las amenaza: el poderoso movimiento democratizador de la sociedad mexicana que en los resultados de la elección del 6 de julio y en las movilizaciones posteriores mostró la magnitud de sus fuerzas y el dinamismo que las anima.

Este movimiento es, hasta cierto punto, la desembocadura política nacional de muchos años de movimientos sociales importantes pero dispersos por sectores y por regiones. Pero esta unificación en un solo movimiento político nacional de masas hubiera sido imposible sin la previa *ruptura externa* del régimen, por un lado con su ala nacionalista y antiimperialista heredera de la tradición cardenista, por el otro con el consenso que todavía conservaba entre importantes sectores de la población.

Los trabajadores y sectores de masas en ruptura con la dominación política del PRI buscaron en aquella ala, también en ruptura, su dirección política natural, afín a sus propias ideas y tradiciones de organización (y del mismo golpe se cerró en lo fundamental la deriva de votos de protesta de sectores populares hacia el PAN, que quedó confinado a sectores de clase media alta para arriba y a sus antiguas bases regionales, sin lograr superar tampoco su carácter congénito de partido subordinado de régimen). Al hacerlo, dieron a esa dirección política confianza y seguridad en esa decisión de ruptura y la impulsaron a ir más y más lejos frente a la resistencia a todo cambio real y la rigidez del propio régimen.

Esta es la lógica del curso de creciente afirmación y radicalización democrática seguido por Cuauhtémoc Cárdenas y la Corriente Democrática, que buena parte de la izquierda socialista tradicional no supo prever y tardó en comprender (mientras otra parte todavía no lo entendió y posiblemente nun-

Siendo éste un sistema cerrado, totalizador y autosuficiente, la ruptura tenía que producirse desde adentro, cuando las condiciones de reproducción del sistema se hubieran agotado. Es lo que sucedió con la crisis mundial de la segunda mitad de los años 70 y todos los años 80 y con la consiguiente reestructuración mundial y nacional del capitalismo. Pero una vez operada desde abajo y desde arriba esa ruptura del círculo mágico de la legitimidad y el consenso del régimen, el encanto se ha roto. Y quienes, arriba y abajo, estaban ideológicamente presos de él, descubren en un acelerado proceso de lucha e interinfluencia cuyos grandes hitos son el terremoto de 1985, la movilización estudiantil de 1986 en adelante y la campaña electoral de Cuauhtémoc Cárdenas que culmina el 6 de julio, al *verdadero enemigo*: no tales o cuales malos funcionarios o tal o cual presidente, sino al PRI, al régimen de partido de Estado y a la cárcel corporativa en la cual el aparato estatal tiene aprisionada la vida política, social y cultural de la sociedad mexicana.

Este es el gran descubrimiento y la gran generalización política que cierra una época en el pensamiento y la conciencia de la mayoría de los mexicanos y que se traduce en un hecho histórico: ruptura profunda, radical e irreversible con el PRI como tal y con su régimen político. Es el verdadero punto de no retorno en la conciencia social, que los reformadores tardíos del PRI no alcanzan a asimilar ni a comprender porque cae más allá del horizonte político de su pensamiento, que todavía se mueve en el interior del ya fracturado y desencantado círculo mágico de la ideología del régimen. Ellos preveían y creían preparar un cambio político controlado y desde arriba para salvar al régimen, una especie de pequeña revolución pasiva, y se encuentran ante un cambio político contra ellos y desde abajo, una auténtica revolución democrática. Para ellos, como ha sido dicho por Jorge G. Castañeda, sucedió *lo impensable*.

Esta incompreensión (peor aún, esta carencia de instrumentos mentales para pensar la nueva realidad) es muy peligrosa en quienes detentan todos los instrumentos del poder. Los puede empujar a buscar por la presión y la violencia estatal la recomposición de un modo de dominación política que ya nadie puede recomponer, porque sus cimientos están destruidos en las conciencias, pero para el cual ellos, prisioneros y usufructuarios del círculo mágico incapacitados para concebir una real politicidad mexicana fuera del régimen de partido de Estado, no tienen sustituto posible ni pensable. Este es también, dicho sea de paso, el drama de tanto ilustre y talentoso intelectual de Estado y de sus institutos, colegios, revistas y editoriales.***

3.

La fuerza y la profundidad del presente desafío de la sociedad al régimen del PRI residen en que en ese desafío se combinan un movimiento democratizador del país; un movimiento recuperador de las tradiciones, las ideas y los valores nacionales y antiimperialistas de la revolución mexicana y el cardenismo (es decir, un poderoso cemento unificador ideológico arraigado durante más de medio siglo en la conciencia nacional profunda de las masas); y los prolegómenos de lo que puede ser un movimiento reivindicador de los trabajadores asalariados para contraponer la defensa y la recuperación de sus conquistas a la salida capitalista de la crisis propuesta y dirigida por el régimen.

Este desafío de hoy tiene al menos dos antecedentes remotos. Uno es el movimiento estudiantil y popular de 1968 que en forma espontánea y con demandas democráticas elementales fue el primero que, sin proponérselo al comienzo, se encontró enfrentando globalmente el autoritarismo y la legitimidad del régimen del PRI. El gobierno, fiel a su propia lógica, identificó régimen político y Estado (modo político de dominación y dominación, cómo se gobierna y quién gobierna), tradujo el desafío al régimen como un ataque al Estado mismo y respondió en consecuencia con la represión, la cárcel y la masacre de Tlatelolco.

El otro antecedente es el movimiento de la Tendencia Democrática de los electricistas encabezado por Rafael Galván que, apoyado en un sector obrero con fuertes tradiciones propias, buscó a partir de 1969 recuperar la ideología nacionalista de la revolución mexicana en su vertiente cardenista e iniciar una democratización sindical. Tanto Lázaro Cárdenas como Cuauhtémoc Cárdenas dieron entonces su apoyo a ese movimiento. Aunque la Tendencia Democrática no cuestionaba la dominación del PRI (el propio Rafael Galván era miembro del PRI) sino que planteaba un cambio de rumbo político, el gobierno y el régimen identificaron la amenaza tanto en su propuesta política como, sobre todo, en sus métodos: impulsar movilizaciones obreras y de masas fuera del control del PRI y de su régimen. La respuesta, aunque menos sangrienta, fue igualmente terminante: arrasar a los electricistas de la Tendencia Democrática con despidos, exclusiones y persecuciones, hasta desarticular totalmente el movimiento.

Conviene recordar estos lejanos antecedentes y las respuestas del régimen porque hoy, como no sucedió entonces, ambos desafíos son simultáneos, no sucesivos, y se combinan en un solo gran movimiento político nacional de masas. Este movimiento por un lado suma a sectores del trabajo

urbano y rural que jamás tocaron aquellos antecesores, y por el otro toma una forma de organización política partidaria que expresamente se propone sustituir el régimen corporativo de partido de Estado (ver el llamamiento de fundación del Partido de la Revolución Democrática, del 21 de octubre) por una democracia republicana tal como está en la Constitución de 1917 (gran legitimadora legal del actual movimiento), pero tal como nunca existió en México desde que esa Constitución fue sancionada.

Este curso acerca al país, como lo afirma ese llamamiento, a una *frontera de su historia: la que separa un régimen político de otro, la que conduce a una ruptura del régimen desde la sociedad* porque aquél es incapaz de cumplir las normas constitucionales del Estado y de reformarse en el sentido exigido por el voto ciudadano.

Surge aquí un interrogante teórico y práctico sobre el cual se jugará en el período próximo el destino mexicano. Estado (relación histórico-social de dominación/subordinación) y régimen político (modo político en que se ejerce esa dominación, modo de gobierno) no son lo mismo. La ruptura del Estado así definido entraña una revolución social. La ruptura del régimen político (cuando éste es incapaz de reformarse democráticamente y entra en conflicto autoritario con la sociedad) significa tan sólo una transformación política, *una revolución democrática*, no una transformación social del Estado.

La naciente organización política del nuevo movimiento nacional de masas, el Partido de la Revolución Democrática, se propone precisamente lo que su nombre dice. Es lo que unifica a todas las corrientes y ciudadanos que convergen en él. El interrogante es el siguiente: esta revolución democrática, este cambio radical del régimen político para liberar todas las fuerzas productivas, sociales, culturales, intelectuales y políticas del país oprimidas por el régimen caduco del corporativismo estatal ¿es posible en los marcos constitucionales y sin cambiar la juridicidad definida por esos marcos, es decir, el Estado mismo? El movimiento democratizador responde sin equívocos que sí.

El Partido Revolucionario Institucional y su régimen, hasta el momento, se empeñan en demostrar lo contrario y en crear las condiciones para que su demostración se verifique en la realidad. El PRI identifica a la continuidad de su propio gobierno en el país y en los estados con la supervivencia del Estado mismo, identifica su régimen político con el Estado y pretende presentar en sus dichos (discursos y documentos oficiales) y en sus hechos (fraudes electorales, monopolio informativo, afirmación del corporativismo y re-

presión) a todo ataque al continuismo del PRI como un ataque contra el Estado y sus normas constitucionales.

La respuesta del régimen encierra graves peligros para el país. La historia de muchos países, y también la del nuestro, muestra que allí donde el régimen dominante, frente a una movilización política de masas pacífica y legal que lo cuestiona, se ha atrincherado en la identificación entre régimen político y Estado o entre su propio gobierno y los intereses históricos de la nación, ha llevado invariablemente a salidas y soluciones violentas en uno u otro sentido.

El movimiento democrático mexicano y su dirección han sabido ubicar y eludir hasta ahora el dilema atroz en que lo ha querido colocar el PRI desde el descomunal fraude electoral del 6 de julio y sus secuelas en los fraudes de las elecciones estatales de Veracruz y Tabasco: someterse y subordinarse al régimen y a su lógica o lanzarse al choque violento y a la insurrección. No es desde el lado de la oposición, sino desde el del gobierno que se insiste en hacer más y más estrecho el sendero de la legalidad republicana.

Habrá que persistir en ensancharlo desde abajo movilizándolo a los sectores democráticos reguladores y estabilizadores de la sociedad, para impedir que el régimen quiera ahogar en la inestabilidad, la ilegalidad y el caos de su propia crisis a la emergente organización política de las fuerzas sociales portadoras de la revolución democrática.

México, 12 de noviembre, 1988

Referencias

- Gerardo Avalos propone, en un ensayo reciente aún no publicado, utilizar la expresión "partido del aparato estatal". Me parece justo dar este sentido preciso a la fórmula "partido de Estado" que utilizo a lo largo de este trabajo. Ver Gerardo Avalos, "Notas sobre el partido del aparato estatal", FCP y S, inédito.
- ** Desarrollo estos temas en dos ensayos: "México: dos crisis" (1983) y "La larga travesía" (1985), publicados en Adolfo Gilly, *México, la larga travesía*, Editorial Nueva Imagen, México, 1985.

- *** Dejando a salvo las diferencias cualitativas de sistema social, puede decirse que en el mismo callejón sin salida teórico y práctico se vieron la burocracia política del Estado checoslovaco frente a la ruptura desde arriba y desde adentro de Alexander Dubcek en 1968 o la del Estado polaco frente a la ruptura desde abajo de Solidaridad en 1980-1981. En ambos casos la respuesta al cuestionamiento por la sociedad del régimen de partido de Estado fue la violencia máxima del aparato estatal, el golpe de Estado militar (externo en Checoslovaquia, interno en Polonia) para salvar al sistema de partido único estatal. Una respuesta similar a un nivel más bajo acaba de dar, frente a un desafío semejante, la burocracia política del Estado y el partido único en Argelia: entre 300 y 500 muertos ha sido el costo.

